

La política española hacia el Mediterráneo

Antonio Marquina Barrio
Director UNISCI
Universidad Complutense de Madrid

La política exterior española hacia el Mediterráneo ha tenido un componente bilateral y multilateral desde mediados de los años noventa.

Durante la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 1995 se realizó la conferencia de Barcelona sobre el Mediterráneo, lanzándose un proceso para afrontar los nuevos desafíos políticos, económicos y sociales en el Mediterráneo. Asimismo España contribuyó al lanzamiento del diálogo mediterráneo de la OTAN. Posteriormente, una vez finalizada la guerra civil argelina, y levantadas las sanciones a Libia por los atentados terroristas de un avión de la PANAM y otro de la UTA, el diálogo 5+5 reanudó su andadura a partir de 2001. Asimismo se desarrollaron otras iniciativas como el Foro Mediterráneo.

Una evaluación desapasionada de estos procesos y aproximaciones nos presenta un panorama poco convincente en cuanto a realizaciones. El proceso de Barcelona entra rápidamente en crisis en la cumbre de Malta de 1996, al irrumpir el conflicto entre israelíes y palestinos en la conferencia, se intenta revitalizar bajo presidencia británica, y se llega a la cumbre de Stuttgart en abril de 1999 con la aprobación de las guías para la Carta de paz y estabilidad, Carta que la posterior presidencia francesa no puede conseguir consensuar en Marsella al iniciarse la segunda intifada.

Luego tendrán lugar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, induciendo la adopción de nuevas políticas y nuevas aproximaciones al mundo musulmán a nivel global. España aprovechará la presidencia de la UE en 2002 para relanzar el proceso de Barcelona con la declaración de Valencia, para al año siguiente entrar en un proceso bastante irreconocible para los Estados árabes, como consecuencia de la guerra y ocupación de Iraq por Estados Unidos y su coalición.

A partir de este momento y con el lanzamiento de la política de vecindad europea el proceso de Barcelona quedó ya muy tocado. En el capítulo político se había privilegiado desde el principio la economía sobre la política. En el campo de seguridad se había intentado proyectar la agenda europea en un espacio de seguridad muy mal diseñado para el tratamiento de las armas de destrucción masiva y se habían adoptado principios y conceptos que no podían ser operativos. EuroMesco tampoco fue un laboratorio de ideas adecuado y su contribución en el relanzamiento del primer capítulo fue poco imaginativa y sobre todo, poco operativa. En el campo económico la brecha entre el norte y el sur del Mediterráneo creció sustancialmente. Y en el campo social y cultural el diálogo se centró en los productos culturales, teniendo como interlocutores las élites occidentalizadas. La cuestión migratoria se acabó también encauzando mínimamente, pero de forma reactiva.

Teniendo en cuenta esta experiencia se podría haber esperado una política más imaginativa española o una crítica española más severa a iniciativas como la propuesta por el presidente francés Sarkozy “Unión por el Mediterráneo”. Este no fue el caso. El tema del desarrollo político no aparecía en la iniciativa e incluso se mantenía literalmente el primer capítulo del texto de la conferencia de Barcelona. Era aberrante. Los riesgos a la seguridad inducidos por la creciente apatía de la gente, en especial de jóvenes diplomados y de la baja clase media, la pérdida de control político y la búsqueda de alternativas no se tomaron en consideración. A esto

COMENTARIOS UNISCI

vino a añadirse la crisis económica, la falta de avances en el proceso de paz entre árabes e israelíes y el arreglo institucional. España consiguió la secretaría de la Unión, pero el sistema institucional no resultó suficientemente operativo para hacer frente a la nueva situación, teniendo en cuenta la carencia de medios adecuados, los planteamientos árabes y la presencia institucional de Israel. Tampoco Egipto fue suficientemente permeable a los intereses y planteamientos españoles.

Con las revueltas árabes el proceso quedó congelado y habrá que pensar en iniciativas mejor pensadas y más adecuadas al nuevo contexto mediterráneo que se abre, evitando dilapidar esfuerzos y dinero del contribuyente.

En el campo bilateral la política española hacia el Mediterráneo ha mantenido a Marruecos como el interlocutor fundamental en el diálogo político y la cooperación. Si durante la presidencia de José María Aznar la relación de España con Argelia y Marruecos se acabó equilibrando, en medio de fuertes desencuentros con Marruecos y que dieron lugar a la crisis de la isla de Perejil, durante los años de Rodríguez Zapatero, esta relación quedó seriamente desequilibrada, mejorando las relaciones con Marruecos a cambio de la realización de un giro notable en la posición española con respecto a la descolonización definitiva del Sahara Occidental, por más que se dijera que se respetaban los principios. La pretensión de fomentar el gran Magreb por parte española contribuyendo a solucionar este contencioso resultó un asunto demasiado arduo y excesivamente voluntarista. Esto producirá un enfriamiento de relaciones con Argelia e inducirá de nuevo medidas de retorsión por parte de Argelia. En realidad Argelia sigue siendo la asignatura pendiente española en el Magreb.

De forma simultánea veremos la realización de otro giro adanista español en el contencioso de España con Gibraltar y la creación del Foro de diálogo sobre Gibraltar, teniendo como resultado un desastre sin paliativos. El planteamiento alternativo que se trató desarrollar confundía los deseos con la realidad.

En el caso de Ceuta y Melilla las posiciones españolas se han mantenido formalmente e incluso teóricamente se han visto fortalecidas con las visitas de Rodríguez Zapatero a ambas ciudades en 2006 y del Rey en 2007, pero el proceso de venta de propiedades a ciudadanos de origen marroquí se ha incrementado. El resultado acabará siendo una cesión silenciosa.

En el campo económico la presencia española en el mundo árabe, saliendo del Magreb sigue siendo una asignatura pendiente- yendo más allá de la venta de armamento- y en el campo de la cooperación sería oportuna una mejor distribución de recursos entre países. Una excepción en el Mediterráneo lo constituye Turquía, pero Turquía no es un Estado árabe. Hay que hacer notar que la crisis económica lo que está permitiendo es la presencia económica de grupos inversores árabes, asunto interesante que hubiera exigido una mejor planificación española.

Por otra parte la pretensión española de jugar como un interlocutor central en el proceso de paz de Oriente Medio, abriendo la vía siria, ha acabado mostrando las propias limitaciones de unos gobiernos escorados hacia posiciones más favorables a los árabes que a lo propios israelíes.